

El proyecto de real decreto tiene por objeto la aprobación del Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., de conformidad con lo previsto en el artículo 42 y en la disposición final undécima de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Por su propia naturaleza, se trata de una norma de carácter eminentemente organizativo, conteniéndose las normas específicas relativas a los correspondientes tratamientos de los datos personales en la propia Ley 2/2023, de 20 de febrero, cuyo Anteproyecto fue objeto de nuestro Informe 20/2022. De este modo, tal y como se indicaba en el mismo, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. ostentará la condición de responsable de los tratamientos de datos personales que realice, tratamiento que encontraría su legitimación en la letra c) del artículo 6.1. del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Asimismo, deberá cumplir con las previsiones y las garantías específicas que, en materia de protección de datos personales, se contienen en el Título VI de la Ley 2/2023, de 20 de febrero.

A este respecto, destaca la extensión del deber de secreto previsto en el artículo 19.4 de la ley respecto de las informaciones que conozcan los funcionarios de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. que desarrollen actividades de investigación, a todo el personal al servicio de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., sobre los datos personales que conozcan en el desempeño de sus tareas y de cuantas informaciones de naturaleza confidencial hubiera conocido en el ejercicio de aquellas. De este modo se refuerzan las obligaciones de confidencialidad establecidas por la propia ley, así como, respecto de cualesquiera datos de carácter personal, el deber de confidencialidad recogido en el artículo 5 de la LOPDGDD.

Por otro lado, el artículo 11.2 del proyecto contempla la designación del delegado de protección de datos por la Presidencia de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, al que se dotará de medios personales y materiales para el ejercicio de las funciones atribuidas por la normativa vigente.

Consecuentemente, se informa favorablemente el proyecto de real decreto.